

El Financiamiento al “Desarrollo” ..y la desintegración de las protecciones socioambientales

Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD)

Los BMDs son grandes bancos compuestos y gobernados por los países miembros. Financian al sector público y privado en nombre del “desarrollo”. Algunos tienen un enfoque regional, otros sectorial. En conjunto tienen un gran impacto, fomentando inversiones en toda área social y económica - desde los programas sociales y reformas legales hasta proyectos de infraestructura y la integración comercial.

BM: Banco Mundial
CFI: Corporación Financiera Internacional
BID: Banco Interamericano de Desarrollo
CAF: Banco de Desarrollo de América Latina
BAfD: Banco Africano de Desarrollo
BAfD: Banco Asiático de Desarrollo
AIIB: Banco Asiático de Inversión en Infraestructura
BEI: Banco Europeo de Inversiones
BERD: Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo
NBD: Banco Nuevo de Desarrollo (BRICS)
BIsD: Banco Islámico de Desarrollo
Y muchos más!

Alianzas público-privadas

Mientras en el pasado los grandes proyectos de infraestructura o proyectos de servicios públicos han sido principalmente financiados como obras públicas, ahora se ve una tendencia creciente de financiar estos proyectos a través de alianzas público-privadas (APPs) entre gobiernos, IFIs e inversionistas privados. Aunque las APPs pueden facilitar la inversión privada, también pueden traer consecuencias negativas como la disminución de los impuestos corporativos o el aumento de las tarifas para los servicios al consumidor. La población termina asumiendo el riesgo de las inversiones privadas mientras las empresas ganan control sobre los bienes comunes y los servicios públicos.

Bancos Nacionales de Desarrollo e Inversión y Agencias de Crédito a la Exportación

Estos bancos y agencias son órganos del Estado. Usan fondos públicos para fomentar el “desarrollo” nacional, y facilitar las inversiones o exportaciones por empresas nacionales en el exterior.

CDB: Banco de Desarrollo de China
Exim China: Banco de Exportación e Importación de China
JICA: Agencia de Cooperación Internacional del Japón
BNDES: Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Brasil)
OPIC: Corporación para Inversiones Privadas en el Extranjero (EEUU)
KfW: Banco Alemán de Desarrollo
FMO: Corporación Financiera de Desarrollo de Holanda
Exim India: Banco de Exportación e Importación de la India
DBSA: Banco de Desarrollo del África Meridional (Sudáfrica)
Y mucho más!

Fondos Monetarios

Estos fondos otorgan préstamos a países en crisis económica para estabilizar el sistema monetario internacional. Pero en el caso del FMI se puede obligar a los países que reciben préstamos a realizar cambios de carácter neoliberal, tales como debilitar sus protecciones laborales o programas de seguridad social, o adoptar otras medidas de austeridad o ajustes estructurales.

FMI: Fondo Monetario Internacional
CRA: Acuerdo de Contingencia de Reserva (BRICS)

Tratados de Libre Comercio (TLCs)

En el marco de los TLCs los gobiernos modifican su marco legal y regulatorio para garantizar a las empresas transnacionales seguridad en sus inversiones. De lo contrario, los transnacionales pueden acudir a un mecanismo del Banco Mundial, llamado el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), para demandar a los gobiernos por sumas millonarias al sentir vulneradas sus ganancias.

Las leyes y reglamentos nacionales

Durante décadas, los movimientos sociales han luchado para crear leyes y reglamentos nacionales que rijan la financiación y ejecución de los proyectos de desarrollo. Estos marcos nacionales incluyen a los derechos laborales, requerimientos sobre la evaluación de impactos ambientales, protecciones para los derechos a la tierra, territorio y recursos naturales y la salud, así como leyes sobre el acceso a la información y la consulta, entre otros. También se incluyen regulaciones tributarias, provisiones para servicios públicos y medidas para prevenir los monopolios. Estos marcos son fundamentales para asegurar que las inversiones realmente lleven al desarrollo y no atropellen los derechos humanos. Desafortunadamente, hoy vemos una tendencia alarmante a la desintegración de los marcos socioambientales nacionales con el objetivo de fomentar inversiones mayores y más rápidas. Ver abajo algunos ejemplos.

Salvaguardas de los Bancos de Desarrollo

Ante la presión social, los bancos adoptaron políticas operativas, o salvaguardas ambientales y sociales, que establecen estándares de buenas prácticas para la inversión al “desarrollo”, y que pueden garantizar consultas a las comunidades, acceso a información o mecanismos para la rendición de cuentas y otras medidas para prevenir daño a las comunidades o al ambiente. Sin embargo, muchas veces estas políticas no se cumplen. En los últimos años se tiende a flexibilizar los estándares para facilitar las inversiones. Los países argumentan que tienen sus propias leyes y reglamentos que pueden proteger a las comunidades y el medio ambiente. Pero vemos que muchos países no tienen reglamentos adecuados y donde sí los tienen, se están debilitando.

Sociedad civil

Una sociedad civil activa es algo vital para asegurar que los procesos de desarrollo respondan a las necesidades del pueblo y para vigilar que los mismos respeten los derechos humanos. Pero actualmente el espacio para la participación pública dentro de los procesos de desarrollo se está volviendo más y más limitado. En el 2014 hubo amenazas en contra de la sociedad civil en más de 96 países. En 2015 se registraron restricciones legales en contra de asociaciones y ONGs en Rusia, India, Camboya y Pakistán, entre otros. A la fecha continúan las medidas para criminalizar a pueblos indígenas y otros defensores ambientales y de derechos humanos; y proscribir la libertad de expresión y la disidencia.

México

En 2014 el gobierno impuso la “Reforma Energética” la cual modificó y creó nuevas leyes en materia de petróleo, gas, electricidad, geotermia, agua, trabajo, ambiente, inversión extranjera, minería, fracking, tenencia de la tierra, etc. Con ello se disminuyeron los derechos laborales, de salud, de educación, entre otros. El movimiento social ha sido criminalizado y el gobierno ha encarcelado decenas de defensores y defensoras de los derechos humanos.

derechosendesarrollo.org

Perú

Entre 2013 y 2015, el gobierno ha aprobado una serie de normas que favorecen la inversión privada a costa de la institucionalidad ambiental. Se han limitado las funciones de la institución fiscalizadora ambiental nacional, recortado los plazos para la certificación ambiental y cambiado sus procedimientos - otorgándoles menos tiempo a los técnicos para emitir su opinión sobre instrumentos de gestión ambiental y sancionándoles de no cumplir con estos plazos-. Entre otras medidas realizadas sin mecanismos de transparencia y participación ciudadana adecuados.

Brasil

En los últimos años, Brasil debilitó las protecciones sociales y ambientales a gran escala. El Código Forestal de 2012 eliminó los requerimientos que obligaban a los propietarios a mantener áreas de conservación y una cantidad de vegetación nativa. El código creó una especie de amnistía para la deforestación, incluyendo a aquellos que realicen actividades agrícolas ilícitas en áreas protegidas. Esto favoreció la expansión de la agroindustria, la deforestación y la presión sobre los territorios de los pueblos indígenas.

Túnez

En años recientes el gobierno ha presentado varias propuestas de reformas legislativas con el propósito de atraer inversión privada y facilitar las alianzas público-privadas. Estas propuestas, algunas redactadas por los mismos BMDs, podrían facilitar la privatización de varios sectores de la economía -desde la salud y educación, hasta el sector energético. Este proceso, empujado por los bancos, pone en peligro la incipiente democracia de Túnez, quebrantando la participación de los ciudadanos en decisiones críticas.

Egipto

El BM y el FMI otorgaron asistencia técnica antes y después de la “Primavera Árabe”, obligando a los gobiernos a eliminar subsidios en alimentos y combustible, argumentando que los subsidios son ineficientes y distorsionan el mercado. Pero la mayoría de la población de ingresos bajos y medios, depende de ellos para abastecer sus necesidades básicas. Sin fuentes sólidas de trabajo y asistencia social, la eliminación de subsidios amenaza con aumentar la pobreza, incitando más conflictos sociales.

Sudáfrica

El gobierno ejecutó en 2010 el Acta para el Desarrollo de Infraestructura con el fin de acelerar la infraestructura y facilitar los proyectos “estratégicos”, eliminando requerimientos procesales. Aunque esos proyectos de minería, aeropuertos, puertos, etc., tienen grandes riesgos e impactos socioambientales, el Acta impone plazos cortos para su implementación, dificultando las evaluaciones sociales y ambientales y las consultas públicas. Además, el Acta provee al gobierno mayor poder para expropiar tierras a favor de las actividades de desarrollo.

India

En 2015, bajo presión de las corporaciones, del BM y del FMI, el gobierno creó una nueva Ordenanza sobre Tierras que eliminara las obligaciones de los inversionistas de obtener el consentimiento de las comunidades locales, y de realizar estudios sociales y ambientales para la adquisición de tierras. Si se aprueba, aumentaría la cifra de más de 50 millones de campesinos y grupos marginados, que han sido desplazados por “proyectos de desarrollo” durante los últimos 50 años.

Indonesia

En 2012, con asistencia del Banco Asiático de Desarrollo, el gobierno promulgó la Ley de Adquisición de Tierras para el Desarrollo, sin suficiente protección para los derechos de la tierra, requerimientos para compensación justa, o prohibiciones contra el desplazamiento forzado. En 2015 se modificó la ley para fomentar obras de infraestructura y las alianzas público-privadas. La modificación concedió a las empresas privadas nuevas facultades para financiar la adquisición de tierras, aumentando el riesgo de su acaparamiento.

Georgia

Desde 2007 el gobierno ha debilitado la legislación ambiental para permitir la extracción de recursos naturales y el desarrollo de grandes proyectos de energía e infraestructura, sin evaluación de impacto ambiental o social. Ahora, si se encuentran “áreas protegidas” en los sitios seleccionados para proyectos, éstos se modifican, dejando el camino abierto para las inversiones. Como consecuencia, se ha debilitado la participación pública en la toma de decisiones sobre el desarrollo, así como la autoridad del estado en la fiscalización ambiental.

Ucrania

En 2011, el gobierno creó “El Reglamento de Desarrollo Urbano” que eliminó el sistema nacional de evaluación de impacto ambiental y la aprobación de la autoridad ambiental para actividades de alto riesgo ambiental. En el 2014, para mejorar el “clima comercial”, impuso una moratoria a las inspecciones ambientales. Los proyectos de infraestructura (energía, transporte y sectores industriales) proceden sin evaluación ni mitigación de los impactos ambientales, y sin la participación pública adecuada.

Grecia

A partir de 2015, la “troika” formada por la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo y el FMI, agudizaron la imposición del Ajuste Estructural en Grecia por su alto endeudamiento. Esto resultó en el deterioro de los derechos humanos, el aumento de impuestos y la disminución del gasto social en salud, educación y pensiones. Las medidas impulsaron la privatización y la inversión extranjera. La población de Grecia se ha manifestado en contra de este paquete de ajustes en un referéndum histórico.

España

En 2012 el pago de la deuda pública obligó la privatización de la salud y la educación, así como la reducción de salarios, pensiones y cuotas para acceder a la justicia. Como consecuencia se aumentó la pobreza. A raíz de esto, surgió un movimiento popular en contra de las Políticas de Ajuste Estructural impuestas por las instituciones financieras. Como respuesta, el gobierno impuso la Ley Mordaza criminalizando la protesta y la movilización social contra el gobierno y sus políticas.